

**CONVENIO MODELO DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
SIMPLIFICADA
PARA LATINOAMÉRICA**

Borja Jiménez Muñoz

Elena María Domínguez Peco

Joana Gomes Ferreira

PREÁMBULO

La evolución de la delincuencia transnacional, de la más sencilla y tradicional afincada en las zonas de frontera, hasta las complejas organizaciones criminales que tejen sus redes en varios países y emplean sofisticados mecanismos de comunicación y relación, ha tenido su natural reflejo en el desarrollo de la cooperación judicial internacional que pretende dar una respuesta efectiva desde los parámetros del Estado de Derecho.

Esta materia ha tenido un desarrollo exponencial extraordinario en los últimos años a nivel mundial y, en concreto en Latinoamérica, con la proliferación de numerosos Tratados Internacionales, primero, y después con nuevos mecanismos, grupos y redes que se dirigen a combatir estas formas de delincuencia compleja.

Si bien la cooperación judicial internacional continúa tomando cuerpo en América Latina a través principalmente de las Autoridades Centrales, se ha ido abriendo paso, en consonancia con la tendencia europea, una corriente de apertura hacia la comunicación directa entre las autoridades judiciales de los Estados implicados que, junto con la aparición, especialmente en las fronteras y los espacios subregionales, de nuevas fórmulas de cooperación basadas en la relación directa y en la confianza mutua.

Con pleno respeto a la cooperación judicial formal y a los actores que la llevan a cabo, el presente Convenio – que se presenta como complementario y subsidiario de los que regulan aquella- aporta una visión integral de las nuevas formas de cooperación que se han dado en llamar simplificadas o informales.

Se trata con ello de dotar de una estructuración a estas diferentes realidades, para lo que tiene especial relevancia el Título I, dedicado a la identificación de las disposiciones comunes a todas las formas de cooperación reguladas.

Entre ellas, merece especial atención la regulación de las reglas orientadas a garantizar el derecho fundamental al habeas data de los ciudadanos implicados, de suerte que la simplificación de las formas no redunde nunca en una merma de esos derechos. El deber de confidencialidad y el principio de especialidad se exigen con el mismo umbral que sería aplicable en los mismos supuestos a la cooperación formal. Con esta medida, además, se evita cualquier desconfianza hacia las nuevas formas de cooperación, que no por más flexibles pierden en garantías, y se evitan dudas sobre la eficacia de las pruebas obtenidas por esta vía.

Este extremo es tratado específicamente en el Título II, en el que se regulan de forma detallada las formas de cooperación simplificada en los mecanismos de asistencia legal mutua, llegándose a la conclusión de que será el país requirente quién, aplicando su Derecho interno, deba tomar la decisión sobre este aspecto. En todo caso, y vinculado con el extremo cuidado en el respeto y garantía de derechos fundamentales que hemos destacado, quedarían fuera de la cooperación informal en estos casos y con carácter general, las medidas que los afectan y que requieren de autorización judicial.

El Título II, además de una extensa guía sobre la forma y el contenido de las solicitudes, así como el modo de tramitación, que redundan en la seguridad jurídica de los países que habitualmente recurren a estas formas de comunicación, contiene una mención a modalidades específicas de asistencia legal mutua, tales como el envío y notificación de documentos procesales, el intercambio espontáneo de información, la obtención de documentos de registros públicos y la restitución de bienes.

Por otra parte, se prevén formas especiales de cooperación, entre las que se encuentran, entre otras, la videoconferencia o el traslado de detenidos.

Una de las más importantes modalidades especiales es sin duda la cooperación orientada a la recuperación y gestión de activos. Por su especialidad, novedad y relevancia, esta materia es objeto de regulación en un capítulo independiente, en el que se sistematiza una regulación general sobre la materia desde la óptica de la cooperación informal buscando potenciar el recurso a este tipo de medidas – habitualmente en desuso por su complejidad- precisamente mediante el impulso de la comunicación directa para facilitar su ejecución.

Finalmente, en el Título III tienen cabida diferentes formas de cooperación judicial internacional distintas de la asistencia legal mutua que carecen en la región de regulaciones sistemáticas completas.

Por este motivo se ha procedido a realizar una regulación general, que excede sin duda de la simplificación de la cooperación, pero que supone la base mínima a partir de la cual tiene sentido hablar de cooperación informal.

En este Título se regulan la ejecución de sentencias y medidas cautelares, la cooperación en frontera, con sus distintas modalidades tales como la persecución o la vigilancia transfronteriza, las entregas vigiladas y los agentes encubiertos, como relevantes mecanismos de investigación de la delincuencia organizada, y la constitución de equipos conjuntos de investigación.

La naturaleza de estas medidas no permite excluir la cooperación formal, que sigue constituyendo la base de la cooperación internacional. Sin embargo, tras una regulación formal que a su vez presenta la característica de ser una regulación de mínimos orientada a favorecer la cooperación, se prevén formas de empleo de la cooperación informal, principalmente con carácter preparatorio de las medidas.

Lo novedoso y relevante es, pues, que en un solo convenio se prevén ambas fórmulas, asegurando su complementariedad.

Adicionalmente, considerando la complejidad de los mecanismos de investigación a que nos referimos, esas labores de facilitación y preparación constituyen sin duda un aspecto fundamental en aras a su eficacia.

Este documento se presenta como convenio tipo en tanto que busca orientar posibles convenios bilaterales o multilaterales de los países de la región latinoamericana y, en su caso, europeos.

La estructura descrita facilita su uso modular, de forma que se puede optar por tomarlo íntegro o, por el contrario, por integrar un convenio con las Disposiciones Generales y el Título –o incluso los capítulos- que resulten de interés.

TÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1. Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto regular mecanismos para la simplificación de la cooperación judicial internacional en materia penal entre los Estados que lo ratifiquen.

Artículo 2. Alcance de la cooperación judicial internacional simplificada

Se entenderá por cooperación judicial internacional simplificada el conjunto de medidas que tiendan a la comunicación directa entre las autoridades judiciales encargadas de las investigaciones, con miras a agilizar los plazos y a reducir las formalidades de la comunicación, siempre con plena garantía para el proceso y respeto de los derechos de los investigados y de todas las partes procesales.

Artículo 3. Principios generales de complementariedad y subsidiariedad

1. Las reglas contenidas en el presente Convenio complementarían las disposiciones de los Tratados o Convenios internacionales ratificados por las partes en materia de cooperación judicial internacional.
2. Las partes se prestarán asistencia penal de acuerdo al presente convenio, sin perjuicio de las disposiciones más favorables de acuerdos bilaterales.
3. Las medidas que contemplan no suponen ninguna modificación de las competencias atribuidas a las Autoridades Centrales en los respectivos Tratados u ordenamientos internos y se realizarán con pleno respeto a dicho marco convencional y legal.

Artículo 4. Ámbito del presente convenio

Las medidas previstas en el presente convenio serán de aplicación a las solicitudes de asistencia penal mutua dirigidas a:

- a) La preparación y facilitación de las correspondientes Comisiones Rogatorias, en los casos en que sea necesario.
- b) Complementar solicitudes remitidas por Comisiones Rogatorias y resolver consultas.
- c) La obtención directa de pruebas de otro Estado sin necesidad de Comisión Rogatoria, cuando la legislación nacional habilite para ello.
- d) Realizar investigaciones o practicar determinadas diligencias de investigación de forma conjunta por autoridades de varios Estados, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 3.3.
- e) Las dirigidas a facilitar el rápido cumplimiento de resoluciones judiciales de un país en el territorio de otro Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3.3
- f) Cualesquiera otras que puedan adoptarse con la finalidad enunciada en el artículo anterior.

Artículo 5. Mecanismos de cooperación simplificada

Las solicitudes de cooperación podrán llevarse a cabo, entre otras, mediante

- 1°. Comunicaciones directas entre los responsables de la investigación y/o de la cooperación judicial internacional dentro de los órganos investigadores en los distintos Estados.

2°. Los puntos de contacto de las redes de cooperación interinstitucional como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) o la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) y su canal seguro de comunicación Iber@.

3°. La organización de reuniones de trabajo entre responsables de los Estados requirente y requerido.

4° Los funcionarios de un Estado destacados de forma permanente en el territorio de otro Estado con fines de cooperación judicial internacional.

Artículo 6. Deber de cooperación y límites a la prestación de asistencia

1. Las autoridades competentes de los Estados parte vendrán obligadas a prestarse asistencia de acuerdo a los mecanismos regulados en el presente Convenio, en los plazos y forma en él previstos, cuando sean requeridos para ello.

2. Las solicitudes de cooperación podrán, no obstante, ser rechazadas cuando, en virtud de una obligación asumida internacionalmente o de su ordenamiento interno, no puedan ejecutarse sin menoscabar las competencias atribuidas a sus Autoridades Centrales. En caso de imposibilidad de ejecución, el Estado requerido podrá informar al requirente que reproduzca la solicitud en forma de Comisión Rogatoria Internacional con indicación de las menciones y procedimientos que debe observar.

Artículo 7. Confidencialidad y protección de datos

1. Las autoridades emisora y receptora de la solicitud de cooperación simplificada deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar el tratamiento confidencial de los datos facilitados, con respeto a su legislación nacional en materia de protección de datos.

2. En las solicitudes de cooperación tendentes a preparar y facilitar la cooperación formal en virtud de comisión rogatoria, la autoridad requirente podrá solicitar, y la requerida estará obligada a guardar, un especial deber de confidencialidad, cuando la difusión de la información facilitada pueda razonablemente derivar en la ineficacia de la medida que se pretende solicitar.

3. Las solicitudes de cooperación informal no podrán incluir la transferencia de datos personales objeto de protección reforzada salvo que razones excepcionales de extrema urgencia o necesidad lo justifiquen.

Artículo 8. Principio de especialidad

1. Los datos remitidos en virtud de un pedido de asistencia penal mutua simplificada solo podrán emplearse en el procedimiento y para los fines que hayan sido consignados en la solicitud.
2. Si, recibida la información, el país requirente considera necesario ampliar el ámbito de su uso, deberá informar a la autoridad que la remitió para que le autorice expresamente a ese nuevo tratamiento.
3. En caso de no ser autorizado el uso de la información, podrá reiterarse a través de una solicitud formal, sin perjuicio de la ejecución del pedido simplificado.

TÍTULO II. ASISTENCIA LEGAL MUTUA

Capítulo I. Disposiciones generales sobre la cooperación judicial simplificada en el sistema de asistencia legal mutua

Artículo 9. Cooperación simplificada para la comunicación directa entre autoridades judiciales

Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones en vigor, la notificación de documentos procesales, la comunicación espontánea entre autoridades judiciales y la obtención de documentos obrantes en archivos públicos de la autoridad de ejecución, para la obtención de información se realizarán directamente entre autoridades judiciales

Artículo 10. Cooperación simplificada para las solicitudes complementarias a las Comisiones Rogatorias Internacionales

1 Se empleará la cooperación simplificada para solicitudes complementarias a las Comisiones Rogatorias Internacionales, que pueden ser, entre otras, las dirigidas a:

a) El intercambio de información previa a la emisión de la comisión Rogatoria Internacional.

b) El adelanto informal de la solicitud por medios tecnológicos.

c) La remisión de información y documentación parcial y complementaria en el curso de la ejecución.

2. La cooperación simplificada en relación a la Comisión Rogatoria Internacional se emitirá para la obtención de pruebas en el curso de una investigación penal tanto para personas físicas como jurídicas, conforme a lo dispuesto en los tratados en vigor, y se extenderá a las infracciones administrativas susceptibles de recurso jurisdiccional en el Estado de emisión.

Artículo 11. Validez de las pruebas obtenidas mediante cooperación simplificada

1. Las pruebas obtenidas como resultado de las solicitudes de cooperación simplificada tendrán en el Estado de emisión el valor que el ordenamiento jurídico y la práctica de los tribunales les determine, pudiendo incorporarse a los procedimientos en curso bien directamente o bien mediante su reproducción como Comisión Rogatoria Internacional.

2. Quedan excluidas de la cooperación simplificada las solicitudes que afecten a los derechos fundamentales y requieran autorización judicial sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente

Artículo 12. Cooperación simplificada y afectación a derechos fundamentales

1. En el supuesto de que en el Estado de emisión una solicitud concreta no requiera autorización judicial para su cumplimentación, pero sí en el Estado de ejecución, la autoridad de recepción, una vez reconocido y aceptado lo que solicita, procederá conforme a su derecho interno a solicitar la referida autorización o, en su caso, a requerir a la autoridad de emisión a que lo formule mediante la Comisión Rogatoria Internacional.

2. En el supuesto de que se requiera en el Estado de emisión, sea o no requerida en el Estado de ejecución, dicha solicitud se acompañará a la solicitud

Capítulo II. Reglas generales para la emisión y ejecución de solicitudes de cooperación internacional simplificada

Artículo 13. Supuestos que habilitan la emisión

Las solicitudes de cooperación internacional simplificada se emitirán:

- a) Cuando sean necesarias y proporcionadas a los fines para los que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.
- b) Cuando se hayan acordado en un procedimiento penal o administrativo en el Estado de emisión y pudieran ser ejecutadas en el mismo en un caso interno similar.
- c) Cuando, aun no naciendo de un procedimiento penal o administrativo, sea necesaria para los fines de una eventual investigación penal o administrativa.

Artículo 14. Autoridades de emisión

1. Son autoridades de emisión las autoridades judiciales en los términos recogidos en el derecho interno.
2. En el caso de que el derecho nacional permita la emisión de solicitudes de cooperación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, éstas deberán ser debidamente validadas por una autoridad judicial a los efectos de su eficacia como solicitud de cooperación simplificada.

Artículo 15. Contenido de las solicitudes de cooperación internacional simplificada

Cualquier solicitud de cooperación internacional simplificada deberá consistir en un escrito que contenga al menos la siguiente información:

- a) Identificación de la autoridad de emisión.
- b) Invocación de la normativa o convenio sobre la que se emite.
- c) Indicación del proceso penal, investigación en curso o finalidad para la que se solicita, a cargo de autoridad judicial con indicación de los preceptos penales aplicables
- d) Breve descripción del hecho

- e) Referencias, en su caso, a su relación con una solicitud anterior
- f) Indicación de lo solicitado
- g) Plazo de ejecución
- h) Indicación de los efectos que tendrá la información remitida en el país de emisión, especificando si tendrá efectos por si misma o si se cursará con posterioridad una Comisión Rogatoria Internacional.

Artículo 16. Medios de emisión y remisión

1. Las solicitudes de cooperación internacional simplificada se podrán emitir por cualquier medio de cuya recepción quede constancia.
2. El resultado de la ejecución de la solicitud de cooperación se podrá remitir de la misma forma.

Artículo 17. Aceptación de la solicitud de cooperación simplificada

1. La autoridad de recepción, tras valorar la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos precedentes, procederá al reconocimiento y ejecución de la solicitud.
2. En el plazo de 5 días desde la recepción notificará a la autoridad de emisión quién es la autoridad encargada de su ejecución

Artículo 18. Causas de denegación de la solicitud de cooperación simplificada

Son causas de denegación de la solicitud de cooperación simplificada:

- a) Que no concurren algunos de los requisitos establecidos en el artículo 13 o en los apartados a) a g) del artículo 15.
- b) Que se trate de alguna solicitud no susceptible de ser ejecutada como cooperación simplificada conforme a las normas del ordenamiento interno del país requerido.
- c) Que resulte desproporcionada conforme a las reglas de la lógica del Estado de ejecución, siempre que se justifique debidamente.

Artículo 19. Procedimiento de consultas

1. La autoridad de ejecución, con carácter previo a denegar una solicitud podrá entablar un procedimiento de consultas:

a) Cuando considere que no queden suficientemente determinados los apartados a) a g) del artículo 15.

b) Cuando estime que puede practicarse la solicitud de una manera menos gravosa para los derechos de los ciudadanos o más acorde con el derecho nacional.

c) Cuando, por alguna otra razón, no pueda proceder a cumplimentar lo solicitado.

2. El procedimiento de consultas se regirá por las siguientes reglas:

a) Podrá realizarse la consulta de manera informal siempre que quede constancia documental de la misma.

b) En el plazo de 10 días desde la recepción se emitirá la consulta exponiéndose de forma detallada la imposibilidad concreta de ejecutar lo solicitado y ofreciendo una alternativa posible conforme al derecho interno o a los criterios de proporcionalidad.

c) La autoridad de emisión deberá responder en el plazo de 10 días, sin perjuicio de acordar un plazo superior con la autoridad de ejecución en caso de imposibilidad.

d) Si los términos de la consulta son satisfactorios para la autoridad de ejecución, cumplimentará la solicitud a la mayor brevedad posible.

e) La autoridad de ejecución, una vez realizado el proceso de consultas, caso de que no resulte satisfactorio lo propuesto por la autoridad de emisión, procederá a denegar la ejecución y a devolver la solicitud con una explicación fundada de las razones. Dicha devolución no impedirá el planteamiento de la misma cuestión mediante Comisión Rogatoria Internacional si procede.

Artículo 20. Calificación de la urgencia de las solicitudes

1. Las solicitudes de cooperación internacional simplificada deberán ser calificadas como “muy urgentes”, “urgentes” o de “tramitación ordinaria”

2. La calificación de la urgencia corresponderá exclusivamente a la autoridad de emisión, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- a) Las solicitudes de calificación “muy urgente” podrán ser las entregas vigiladas, agentes encubiertos, control de contendedores, vigilancias y persecuciones transfronterizas, información bancaria de la que dependa un embargo posterior y cualquier otra cuya dilación pueda poner en riesgo el éxito inmediato de una investigación
- b) Las solicitudes calificadas como “urgentes” serán las mismas del apartado anterior cuando el curso de la investigación no exija plazos tan cortos
- c) Las solicitudes de “tramitación ordinaria” serán el resto de solicitudes, tales como las de remisión de documentación, notificación de documentos o toma de declaraciones de investigados y testigos.

Artículo 21. Plazos de ejecución de las solicitudes de cooperación simplificada

1. Las solicitudes de calificación “muy urgente” deberán ser ejecutadas en un plazo de entre 24 horas y 5 días como máximo desde el día siguiente de la recepción de la solicitud
2. Las solicitudes calificadas como “urgentes” deberán ser ejecutadas entre 5 y 20 días desde el día siguiente de la recepción de la solicitud
3. Las solicitudes calificadas como “de ejecución ordinaria” deberán ejecutarse en un plazo máximo de 90 días desde el día siguiente de la recepción. Este plazo será prorrogable por otros 60 días a instancias de la autoridad de ejecución
4. Los plazos a los que se refiere este artículo podrán ser modificados por acuerdo de las autoridades de emisión y ejecución.

Artículo 22. Derecho aplicable a la ejecución de las solicitudes

Las solicitudes de cooperación internacional simplificada se ejecutarán conforme a las reglas del Estado requerido, sin perjuicio de que por ambas autoridades se determine la mejor forma de ejecutarlas, y siempre con respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas

Capítulo III. Modalidades específicas de asistencia legal mutua mediante cooperación simplificada que no requieren Comisión Rogatoria Internacional

Artículo 23. Envío y notificación de documentos procesales

1. Podrá realizarse mediante la cooperación simplificada el envío por correo de documentos procesales dirigidos a personas que se hallen en el territorio de otro Estado signatario, sin perjuicio de lo que dispongan otros Tratados o las normas de derecho interno.

2. El envío de documentos procesales se realizará por medio de las autoridades competentes del Estado miembro requerido en caso de que:

a) El domicilio de la persona a la que va dirigido un documento sea desconocido o incierto.

b) El Derecho procesal pertinente del Estado miembro requirente exija una prueba de que el documento ha sido notificado al destinatario distinta de la que pueda obtenerse por correo.

c) No haya resultado posible entregar el documento por correo.

d) El Estado miembro requirente tenga razones justificadas para estimar que el envío por correo resultara ineficaz o inadecuado.

3. Cuando el destinatario no comprenda la lengua en que esté redactado el documento, deberá traducirse éste, o al menos sus partes más relevantes, a la lengua o lenguas conocidas por el destinatario

4. Todo documento procesal deberá ir acompañado de una nota que indique que el destinatario podrá pedir a la autoridad que haya expedido el documento o a otras autoridades de ese Estado información acerca de sus derechos y obligaciones en lo que respecta al documento.

5. En caso de urgencia justificada por el Estado requirente se podrá realizar la notificación directa al destinatario, excepto en los supuestos enumerados en el apartado 2.

Artículo 24. Intercambio espontáneo de información

1. Con las limitaciones impuestas por el Derecho interno, las autoridades judiciales de los Estados signatarios podrán intercambiar información, sin que medie Comisión Rogatoria Internacional, acerca de infracciones penales y de infracciones de disposiciones legales conforme a lo previsto en el presente Convenio cuya persecución o penalización, en el momento del suministro de dicha

información, entre en el ámbito de competencias de la autoridad de emisión o de ejecución.

2. La autoridad que proporcione la información podrá imponer condiciones a la utilización de la información por la autoridad receptora, de conformidad con su Derecho interno.

3. La autoridad receptora estará obligada a respetar dichas condiciones. En caso de que, a juicio de la autoridad requerida, la autoridad emisora no ofrezca garantías suficientes, podrá denegar la información solicitada.

Artículo 25. Obtención de documentos en registros públicos

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros Tratados y en las normas del Derecho interno, podrán realizarse por cooperación simplificada la solicitud de transmisión de documentos obrantes en archivos públicos de las autoridad de ejecución con las formalidades previstas en el artículo 15 sin perjuicio de la formalización posterior como Comisión Rogatoria Internacional, en el caso que resulte necesario para los fines del procedimiento.

Artículo 26. Restitución de bienes

1. A petición la autoridad judicial del Estado requirente y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, el Estado miembro requerido podrá poner a disposición del Estado requirente objetos obtenidos por medios ilícitos para que se restituyan a su legítimo propietario.

2. Las condiciones relativas a la renuncia de los objetos por el Estado requerido, la logística de la devolución, incluidos los gastos que se pudiesen ocasionar, y la eventual compensación a terceros de buena fe se realizarán mediante acuerdo entre ambas autoridades, con respeto a los Tratados internacionales y a las normas del Derecho interno.

Capítulo IV. Modalidades específicas de cooperación judicial simplificada complementarias a una Comisión Rogatoria Internacional

Artículo 27. Videoconferencia

En los términos del artículo 10 del presente Convenio, podrán realizarse mediante la cooperación simplificada cualesquiera acciones orientadas a la preparación de la Comisión Rogatoria Internacional y a la organización de la logística.

Artículo 28. Traslado de detenidos

En los términos del artículo 10 del presente Convenio, podrán realizarse mediante la cooperación simplificada las siguientes actividades complementarias a la Comisión Rogatoria Internacional:

- a) Obtener información previa sobre el lugar de detención y circunstancias.
- b) Gestionar la logística del traslado.
- c) Cualquier otra actividad complementaria de apoyo a la Comisión Rogatoria Internacional.

Artículo 29. Denuncia a efectos procesales

En los términos del artículo 10 del presente Convenio, podrán realizarse mediante la cooperación simplificada los siguientes trámites:

- a) La transmisión de información espontánea y documentos a fin de conocer la situación del procedimiento en el Estado de emisión.
- b) Consultas complementarias durante el análisis del proceso remitido.
- c) El adelanto de la decisión final.

Artículo 30. Identificación y localización de personas

En los términos del artículo 10 del presente Convenio, sin perjuicio de la cooperación policial, podrá realizarse mediante la cooperación simplificada cualquier trámite para la facilitación de la localización e identificación de personas, tanto anterior como coetáneo a la transmisión de una Comisión Rogatoria Internacional.

Artículo 31. Toma de declaración de personas investigadas, testigos o peritos

En los términos del artículo 10 del presente Convenio podrá realizarse mediante la cooperación simplificada cualquier trámite complementario a la Comisión Rogatoria Internacional para:

- a) La identificación y localización de las personas cuya declaración necesita ser tomada.
- b) La gestión del acto y de la presencia de autoridades del país de emisión.
- c) En su caso, el adelanto de la documentación del mismo.

Capítulo V. Recuperación y gestión de activos

Artículo 32. Concepto de recuperación y gestión de activos

A los efectos del presente Convenio, se entenderá por recuperación y gestión de activos cualesquiera acciones de las autoridades competentes de una investigación penal en un Estado parte orientadas a la localización, la identificación y la congelación o inmovilización en otro Estado parte de los bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, efectos, productos o ganancias relacionados con el delito investigado o pertenecientes al patrimonio de la persona encartada, así como las tendentes a asegurar su gestión para evitar su merma durante la tramitación del procedimiento y las que tienen por objeto su transmisión al país en el que se está realizando la investigación.

Artículo 33. Alcance de la cooperación simplificada orientada a la recuperación y gestión de activos

1. Por su naturaleza restrictiva de derechos, la asistencia legal mutua en materia de recuperación y gestión de activos requerirá, salvo que una ley o Tratado disponga lo contrario, de la formalización de las solicitudes de cooperación a través de las correspondientes Comisiones Rogatorias.

2. No obstante, se podrán emplear los mecanismos propios de la cooperación judicial internacional simplificada:

1°. Para el aseguramiento de la posibilidad, oportunidad y eficacia de las medidas que se pretenden solicitar en virtud de Comisión Rogatoria.

2°. Con fines preparatorios de las solicitudes formales, incluida la obtención de información sobre el sistema legal del Estado requerido en esta materia, los órganos competentes o los requisitos formales de la cooperación.

En ambos casos, el pedido de cooperación simplificada tendrá por objeto la obtención de información que permitirá formalizar, en su caso la solicitud de asistencia legal mutua.

3°. En los casos de urgencia, para asegurar la realización de las diligencias absolutamente imprescindibles para garantizar la eficacia de la medida solicitada, sin perjuicio de la inmediata reproducción de la solicitud por los cauces formales previstos al efecto.

Artículo 34. Mecanismos de cooperación simplificada para la recuperación y gestión de activos

Junto con los mecanismos a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio, podrán emplearse como instrumentos propios de la cooperación para estos fines:

1°. Las comunicaciones con los departamentos de investigación y de inteligencia financiera de los países en los que se encuentren o se sospeche que se encuentran los bienes objeto de la medida.

2°. Las comunicaciones con las redes de información y los delegados internacionales tanto de policía especializada como de unidades financieras y, especialmente, de organismos administrativos de gestión de activos de los países parte.

Artículo 35. Identificación y localización de bienes

1. Cuando la solicitud de asistencia simplificada tenga por objeto comprobar la existencia o el estado de conservación de un bien, así como su localización con carácter previo a instar cualquier medida cautelar en el procedimiento, el Estado requirente deberá hacer constar en su escrito esta circunstancia, junto con los requisitos a los que se refiere el artículo 15.

2. En estos casos, la autoridad requerida podrá realizar cuantas gestiones tenga habilitadas en su ordenamiento para cumplir con la solicitud de información y/o localización, con pleno respeto al principio de confidencialidad, sin informar a la persona afectada, incluidas las consultas a los registros para los que esté habilitado.

3. Cuando las medidas que debería llevar a cabo para la correcta identificación y/o localización del bien requieran intervención judicial conforme al derecho del Estado requerido, se informará a la autoridad requirente, quien en caso de

manifestar su interés en la medida, deberá presentar la solicitud de asistencia legal a través de los cauces formales establecidos.

4. La solicitud de información deberá contener de forma precisa y detallada una relación de los datos que la autoridad requirente necesita conocer para la valoración de la solicitud de la medida en el procedimiento con el que está relacionada.

5. Aun cuando no sea expresamente solicitado por la autoridad requirente, si la autoridad requerida identifica terceros de buena fe titulares de derechos sobre los bienes objeto de identificación y/o localización, así como su vinculación a cualquier procedimiento penal o administrativo en su territorio, lo pondrá en conocimiento del país requerido, cesando en su investigación hasta en tanto no sea formulada la solicitud formal de asistencia legal mutua.

Artículo 36. Congelación e inmovilización de bienes

Cuando el objeto de la cooperación internacional sea la solicitud de la congelación o de la inmovilización de bienes en un tercer Estado, solo podrá recurrirse a la comunicación directa como forma de cooperación simplificada en casos de urgencia a los efectos de que la autoridad requerida preste su colaboración para la agilización de los trámites, llevando a cabo, con los límites que su derecho interno le imponga, las acciones preparatorias de la medida.

Artículo 37. Gestión y transferencia de los bienes objeto de medida cautelar

1. En los casos en que, en virtud de una medida cautelar acordada en el país requirente, el Estado requerido se encargue de la gestión de los bienes afectos por la medida que se hallan en su territorio, se podrá recurrir a las comunicaciones directas entre autoridades competentes con el fin de transferir información sobre el estado de los bienes y su productividad.

2. Las comunicaciones podrán extenderse a la preparación y optimización de las condiciones de transferencia de los bienes afectos por el decomiso definitivo, la extinción de dominio o cualquier otra forma de cese en la propiedad efectiva de los mismos.

3. La cooperación simplificada podrá coadyuvar en la conclusión de los acuerdos bilaterales entre las autoridades judiciales o administrativas competentes de los

países parte para la liquidación de los gastos y la distribución del producto obtenido.

TÍTULO III. OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL: REGLAS GENERALES Y FORMAS DE SIMPLIFICACIÓN

Capítulo I. Execução de sentenças penais estrangeiras

Artículo 38. Principio general

As sentenças penais estrangeiras, transitadas em julgado, podem ser executadas em Estado diferente do Estado da condenação, mediante pedido formulado por este.

Artículo 39. Condições especiais de admissibilidade

1. O pedido de execução de uma sentença penal estrangeira só é admissível quando, não se verificando outra causa geral de recusa, se verificarem as seguintes condições:

a) O facto que determinou a condenação seja também punível como crime pela legislação penal do Estado de execução.

b) Se a condenação resultar de julgamento na ausência do condenado, desde que o mesmo tenha tido a possibilidade legal de requerer novo julgamento ou de interpor recurso da sentença.

c) Não contenha disposições contrárias aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico do Estado de execução.

d) O facto não seja objeto de procedimento penal no Estado da execução.

e) O condenado seja nacional do Estado de execução, ou estrangeiro ou apátrida que residam habitualmente no mesmo.

f) A extradição do condenado não seja possível ou não seja considerada aconselhável.

g) A execução da sentença no Estado de execução se justifique pelo interesse da melhor reinserção social do condenado ou da reparação do dano causado pelo crime.

h) O Estado estrangeiro dê garantias de que não agravará a pena imposta no Estado da condenação e que, cumprida a sentença no Estado de execução, considerará extinta a responsabilidade penal do condenado.

i) A duração das penas ou medidas de segurança impostas na sentença não seja inferior a um ano ou, tratando-se de pena pecuniária, o seu montante não seja inferior a quantia equivalente a 30 unidades de conta procesual.

j) O condenado der o seu consentimento, tratando-se de reação criminal privativa de liberdade.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, pode ainda executar-se uma sentença estrangeira se o condenado cumprir, no Estado de execução, condenação por facto distinto do estabelecido na sentença cuja execução é pedida.

3. A execução de sentença estrangeira que impõe reação criminal privativa de liberdade é também admissível, ainda que não se verifiquem as condições das alíneas i) e j) do n.º 1, quando, em caso de evasão para o Estado da execução ou noutra situação em que a pessoa aí se encontre, tiver sido negada a extradição do condenado pelos factos constantes da sentença.

4. O disposto no número anterior é também aplicável, mediante acordo entre os Estados da condenação e da execução, ouvida previamente a pessoa em causa, aos casos em que houver lugar à aplicação de uma medida de expulsão posterior ao cumprimento da pena.

5. A condição referida na alínea i) do n.º 1 pode ser dispensada em casos especiais, designadamente se o estado de saúde do condenado ou razões de ordem familiar ou profissional assim aconselharem.

6. A execução da sentença pode ainda ter lugar, independentemente da verificação das condições do n.º 1, quando o Estado de execução tiver previamente concedido a extradição do seu nacional para procedimento criminal, mediante garantias de devolução para execução da sua pena no Estado da nacionalidade.

Artículo 40. Execução de decisões proferidas por autoridades administrativas

É também possível a execução de decisões finais proferidas em processos por infrações de natureza penal, na fase em que tramitem perante autoridades administrativas bem como infrações que constituam ilícito de mera ordenação social, desde que o interessado tenha tido a possibilidade de recorrer a uma instância jurisdicional.

Artículo 41. Limites da execução

1. A execução da sentença estrangeira limita-se:

a) À pena ou medida de segurança que impliquem privação da liberdade, ou pena pecuniária se, neste caso, forem encontrados no Estado de execução bens do condenado suficientes para garantir, no todo ou em parte, essa execução.

b) À perda de produtos, objetos e instrumentos do crime.

c) À indemnização civil, constante da mesma, se o interessado a requerer.

2. A execução das custas do processo limita-se às que forem devidas ao Estado requerente.

Artículo 42. Documentos e tramitação do pedido

1. O pedido é tramitado entre autoridades centrais, sem prejuízo da via diplomática.

2. O pedido é acompanhado de certidão ou cópia autenticada da sentença a executar e, se for caso disso, de declaração de consentimento do condenado, a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo ..., bem como de informação relativa à duração da prisão preventiva ou ao tempo de cumprimento da sanção criminal até à apresentação do pedido.

3. Quando a sentença respeitar a várias pessoas ou impuser diferentes reacções criminais, o pedido é acompanhado de certidão ou cópia autenticada da parte da sentença a que concretamente se refere a execução.

Artículo 43. Direito aplicável e efeitos da execução

1. A execução de uma sentença estrangeira faz-se em conformidade com a legislação do Estado de execução.

2. As sentenças estrangeiras produzem os efeitos que a lei do Estado de execução confere às sentenças proferidas pelas suas autoridades.

3. O Estado estrangeiro que solicita a execução é o único competente para decidir do recurso de revisão da sentença exequenda.

4. A amnistia, o perdão genérico e o indulto podem ser concedidos tanto pelo Estado da condenação como pelo Estado da execução.

5. O tribunal competente para a execução põe termo a esta quando o Estado da condenação comunicar, pela via prevista no nº1 do artigo 42:

a) Que o condenado foi beneficiado com amnistia, perdão ou indulto que tenham extinguido a pena e as sanções acessórias.

b) Que foi interposto recurso de revisão da sentença exequenda ou de outra decisão que tenha por efeito retirar-lhe força executiva

c) Que o condenado tiver pago a pena pecuniária no Estado da condenação, nos casos em que a execução respeitar a este tipo de pena.

6. Em caso de urgência as comunicações poderão ser feitas diretamente por intermédio da Organização Internacional da Polícia Criminal – INTERPOL – ou por qualquer meio que permita o seu registo por escrito.

7. O início da execução implica renúncia do Estado da condenação à execução da sentença, salvo se o condenado se evadir, caso em que recupera o seu direito de execução ou, tratando-se de pena pecuniária, a partir do momento em que for informado da não execução, total ou parcial, dessa pena.

Artículo 44. Destino das multas e das coisas apreendidas

1. A importância das penas pecuniárias resultante da execução da sentença estrangeira reverte para o Estado de execução.

2. Se o Estado da condenação o solicitar, pode aquela importância ser-lhe entregue ou ser partilhada em partes iguais entre ambos os Estados, mediante reciprocidade.

3. Sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé, os objetos apreendidos em resultado de decisão que decreta a sua perda revertem para o Estado da execução, mas podem ser entregues ao Estado da condenação, a seu pedido, se para este revestirem particular interesse e estiver garantida a reciprocidade.

Artículo 45. Medidas de coação

1. Durante o processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira para fins de execução de reação criminal privativa da liberdade, pode sujeitar-se o condenado que se encontre no Estado de execução a medida de coação que considere adequada.
2. Se tiver sido aplicada prisão preventiva, esta é revogada se se mostrarem esgotados os prazos da lei interna, sem que tenha sido proferida decisão confirmativa.
3. A prisão preventiva pode ser substituída por outra medida de coação, nos termos da lei do Estado de execução.

Artículo 46. Medidas cautelares

O Estado de execução deve tomar as medidas cautelares necessárias à conservação e manutenção de coisas apreendidas, incluindo a sua venda antecipada , de forma a assegurar a execução da sentença relativa à perda.

Artículo 47. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em matéria de tramitação de pedidos de revisão, com vista à execução, de sentenças estrangeiras as autoridades judiciárias de condenação e de execução poderão estabelecer contactos diretos com vista a:

- a) Obter informação sobre a localização do condenado, quando este se encontré no território do Estado de execução.
- b) Obter informação em matéria de direito comparado, nomeadamente com vista a identificar a dupla incriminação e a verificar a ausência de prescrição.
- c) Transmitir antecipadamente a sentença a reconhecer, com vista à execução, a fim de permitir a sua análise.
- d) Informar do resultado da decisão de reconhecimento, sem prejuízo da sua transmissão pelas vias previstas nos instrumentos aplicáveis.

Capítulo II. Equipos conjuntos de investigación

Artículo 48. Constitución de Equipas de investigação criminal conjuntas

1. Por acordo entre dois Estados podem criar-se equipas de investigação criminal conjuntas:

a) Se, no âmbito de investigação criminal de um dos Estados houver necessidade de realizar investigações de especial complexidade com implicações noutro Estado.

b) Se vários Estados realizam investigações criminais que, por força das circunstâncias, tornem indispensável uma ação coordenada e concertada nos Estados envolvidos.

2. O pedido de criação de equipas de investigação criminal conjuntas inclui, para além dos requisitos de um pedido de auxílio judiciário mútuo, a justificação para a sua necessidade e propostas relativas à composição da equipa e à responsabilização pelos custos.

3. Os elementos destacados por cada Estado para a equipa de investigação conjunta podem estar presentes em atos de investigação criminal que se realizem no território do outro Estado, salvo decisão em contrário, devidamente fundamentada, da autoridade nacional que dirigir a equipa, em conformidade com a sua legislação.

4. Os atos de investigação criminal que se realizem no território nacional de um dos Estados podem ser praticados pelos elementos destacados pelo outro para a equipa de investigação conjunta, por decisão da autoridade nacional que dirigir a equipa e mediante aprovação da respetiva autoridade competente.

5. Se a equipa de investigação conjunta necessitar de auxílio de um Estado que não participou na sua criação, o pedido respetivo pode ser apresentado às autoridades competentes do Estado em questão, por qualquer dos Estados membros da equipa, em conformidade com os instrumentos e as disposições legais aplicáveis e pertinentes.

6. As informações legitimamente obtidas pelos membros das equipas de investigação conjuntas durante o exercício da sua atividade, que não sejam acessíveis por outra forma às autoridades competentes dos Estados que os destacaram, serão utilizadas:

a) Para os efeitos para os quais foi criada a equipa.

b) Mediante autorização prévia das autoridades competentes do Estado onde foram recolhidas as informações, para efeitos de deteção, investigação e instauração de procedimento judicial por outras infrações penais, desde que tal utilização não comprometa investigações em curso, ou quando estejam em causa factos relativamente aos quais pode ser recusado pelo Estado em causa o auxílio mútuo.

c) Para evitar uma ameaça grave e imediata à segurança pública, e sem prejuízo do disposto na alínea b), caso seja posteriormente instaurado procedimento penal.

d) Para outros efeitos, desde que exista acordo dos Estados que criaram a equipa.

7. Pode ser permitida, por acordo, a participação nas equipas de investigação conjuntas de pessoas que não sejam representantes dos Estados que as criaram, de acordo com a legislação nacional ou outro instrumento jurídico aplicável, não gozando estas pessoas dos direitos conferidos aos membros destacados pelos Estados, salvo acordo expresso em contrário.

Artículo 49. Responsabilidade civil dos membros das equipas de investigação criminal conjuntas

1. Os Estados respondem pelos danos que os elementos por si designados para a equipa de investigação conjunta causarem a terceiros no desempenho das suas funções, de acordo com a legislação do Estado onde os danos são provocados.

2. Os Estados asseguram a reparação dos danos causados no seu território por elementos destacados pelo Estado estrangeiro, devendo exercer o seu direito de regresso relativamente a tudo o que tenham pago.

3. Os Estados procedem ao reembolso das quantias pagas a terceiros pelo Estado estrangeiro por danos causados pelos membros das equipas de investigação conjuntas por si designados.

Artículo 50. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em matéria de constituição de equipas de investigação conjuntas as autoridades judiciárias competentes poderão estabelecer contactos diretos informais com vista a:

a) Reunir entre si para identificar o objecto das respetivas investigações.

- b) Identificar a necessidade ou utilidade na constituição de uma equipa de investigação conjunta.
- c) Negociar e aprovar os termos do acordo constitutivo da mesma.
- d) Obter informação sobre o seu funcionamento.
- e) Obter elementos de prova recolhidos na pendencia da Equipa de forma antecipada.

Capítulo III. Entregas controladas ou vigiadas

Artículo 51. Autorización de entregas vigiladas internacionales

1. Pode ser autorizada caso a caso, pela autoridade nacional competente, perante o pedido de um ou mais Estados estrangeiros, nomeadamente se previsto em instrumento convencional ou com base em reciprocidade, a não atuação dos órgãos de polícia criminal nacionais, no âmbito de investigações criminais transfronteiriças relativas a infrações que admitam extradição, com a finalidade de proporcionar, em colaboração com o Estado ou Estados estrangeiros, a identificação e responsabilização criminal do maior número de agentes da referida infração.

2. O direito de agir e a direção e controlo das operações de investigação criminal conduzidas no âmbito do número anterior cabem às autoridades nacionais do Estado que autoriza a entrega, sem prejuízo da devida colaboração com as autoridades estrangeiras competentes que solicitam autorização para a entrega.

3. A autorização concedida nos termos do n.º 1 não prejudica o exercício da ação penal pelos factos aos quais a lei do Estado que autoriza a entrega se aplica e só é concedida quando:

- a) Seja assegurado pelas autoridades estrangeiras competentes que a sua legislação prevê as sanções penais adequadas contra os agentes e que a ação penal será exercida.
- b) Seja garantida pelas autoridades estrangeiras competentes a segurança de substâncias ou bens em causa contra riscos de fuga ou extravio, e
- c) As autoridades estrangeiras competentes se comprometam a comunicar, com urgência, informação pormenorizada sobre os resultados da operação e os pormenores da ação desenvolvida por cada um dos agentes da prática das

infrações, especialmente dos que agiram no Estado que autorizou a entrega controlada.

4. Ainda que concedida a autorização mencionada anteriormente, os órgãos de polícia criminal do Estado que autorizou a entrega controlada intervêm se as margens de segurança tiverem diminuído sensivelmente ou se se verificar qualquer circunstância que dificulte a futura detenção dos agentes ou apreensão de substâncias ou bens; se esta intervenção não tiver sido comunicada previamente à entidade que solicitou a autorização, sê-lo-á nas vinte e quatro horas seguintes, mediante relato escrito.

5. Por acordo com o Estado de destino, perante substâncias proibidas ou perigosas que se encontram em trânsito, estas podem ser substituídas parcialmente por outras inócuas, de tal se lavrando o auto que dará conta da substituição e da sua justificação.

6. O não cumprimento das obrigações assumidas pelas autoridades estrangeiras pode constituir fundamento de recusa de autorização em pedidos futuros.

Artículo 52. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em materia entregas controladas ou vigiadas, em caso de urgência, a autorização a que se refere o artigo anterior pode ser solicitada por contacto direto entre as autoridades judiciárias competentes e concedida pela mesma via, sem prejuízo da sua formalização posterior.

Capítulo IV. Agentes encubiertos

Artículo 53. Habilitación de Ações encobertas

1. Os funcionários de investigação criminal de um Estado ou aos mesmos equiparados podem desenvolver ações encobertas noutro Estado, com estatuto idêntico ao dos respetivos funcionários de investigação criminal e nos demais termos da legislação aplicável.

2. A atuação referida no número anterior depende de pedido baseado em acordo, tratado ou convenção internacional que expressamente preveja esta forma de cooperação.

Artículo 54. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em matéria de acções encobertas as autoridades judiciárias competentes poderão estabelecer contactos diretos informais com vista a:

- a) Identificar o objecto das respetivas investigações.
- b) Identificar a necessidade do recurso a uma acção encoberta.
- c) Definir os termos em que a mesma decorrerá.
- d) Obter informação antecipada sobre os seus resultados.

Capítulo V. Cooperação entre autoridades fronteiriças

Artículo 55. Transmissão dos pedidos

1. As autoridades judiciárias dos tribunais fronteiriços comunicam diretamente entre si os pedidos de entreajuda ou auxílio judiciário em matéria penal, sem prejuízo, sempre que necessário, da utilização das vias de transmissão previstas nas convenções em vigor entre os respetivos Estados.
2. Entende-se por tribunais fronteiriços os tribunais dos Estados cujas áreas de jurisdição correspondam a circunscrições entre si geograficamente contíguas ou vizinhas .
3. Será adotada uma listagem identificando tribunais fronteiriços aos quais se aplica as presentes disposições.
4. Quando autoridades fronteiriças enviarem diretamente pedidos de auxílio judiciário deverão informar a respetiva autoridade central, para fins estatísticos.

Artículo 56. Dispensa de tradução dos pedidos

Os pedidos e documentos relativos à entreajuda ou ao auxílio judiciário internacional em matéria penal que sejam tramitados entre autoridades dos Tribunais fronteiriços, cuja identificação consta da lista anexa, podem ser redigidos na língua do Estado requerente, renunciando as respetivas autoridades a fazer uso das reservas que tenham formulado a este respeito em instrumentos internacionais de que seja Parte o Estado a que pertencem.

Artículo 57. Dispensa de legalização

Os pedidos e documentos transmitidos entre as autoridades dos tribunais fronteiriços são dispensados de legalização ou apostilha.

Capítulo VI. Perseguição transfronteira

Artículo 58. Âmbito de la persecución transfronteriza

1. Os agentes de um dos Estados que, no seu território, persigam uma pessoa apanhada em flagrante delito a cometer um crime que possa dar origem a extradição ou a nele tomar parte ou uma pessoa que se evadiu, são autorizados a continuar a perseguição no território do outro Estado, através de uma fronteira terrestre comum, sem autorização prévia das autoridades competentes do outro Estado, sempre que estas não puderem ser avisadas previamente da entrada no seu território, devido a urgência especial, ou não puderem chegar ao local a tempo de retomarem a perseguição.

2. A perseguição transfronteira no território da outra Parte pode realizar-se até 50 km da fronteira comum ou durante um período de tempo não superior a duas horas, a partir da passagem da fronteira comum.

3. A perseguição só pode efetuar-se nas seguintes condições:

a) Os agentes perseguidores devem cumprir as disposições do presente artigo e o direito da parte contratante em cujo território atuam; devem obedecer às ordens das autoridades localmente competentes.

b) A perseguição efetuar-se-á unicamente através das fronteiras terrestres.

c) É proibida a entrada nos domicílios e nos locais não acessíveis ao público.

d) Os agentes perseguidores serão facilmente identificáveis, quer através da utilização de um uniforme, quer de uma braçadeira ou de dispositivos acessórios colocados no seu veículo. São proibidos de trajar à civil em veículos sem a identificação acima referida; os agentes perseguidores devem poder justificar a qualquer momento o carácter oficial da sua missão.

e) Os agentes perseguidores podem estar munidos da sua arma de serviço; é proibida a sua utilização salvo em caso de legítima defesa.

g) Após cada operação a que se referem os n.ºs 1 e 2, os agentes perseguidores apresentar-se-ão perante as autoridades localmente competentes do Estado em

cujo território atuaram, relatando a sua missão; a pedido destas autoridades, devem permanecer à sua disposição até que as circunstâncias da sua ação tenham sido suficientemente esclarecidas, mesmo no caso de a perseguição não ter levado à detenção da pessoa perseguida.

h) As autoridades do Estado de que os agentes de vigilância são originários colaborarão a pedido das autoridades do Estado em cujo território se realizou a vigilância, no inquérito consecutivo à operação em que participaram, inclusivamente em processos judiciais.

4. A perseguição terminará a partir do momento em que o Estado em cujo território deva efetuar-se o solicitar. A solicitação dos agentes perseguidores, as autoridades localmente competentes interpelarão a pessoa perseguida a fim de determinar a sua identidade ou proceder à sua detenção.

5. A manutenção da detenção, por prazo superior a seis horas, dependerá da execução de pedido de detenção provisória apresentado ou mandado de detenção difundido internacionalmente. Se for decidido, pelas autoridades competentes do Estado onde decorreu a perseguição, que a detenção da pessoa seja mantida, manter a detenção, aplicar-se-ão as disposições constantes dos acordos vigentes entre ambos os Estados em matéria de extradição.

Artículo 59. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em matéria de perseguição transfronteiriça os agentes perseguidores deverão contactar as autoridades competentes para determinar a detenção ou executar o pedido de detenção provisória da pessoa perseguida o mais brevemente possível e por qualquer via que permita o estabelecimento do contacto (telefone, whatsapp, mail)

Capítulo VII. Vigilância transfronteiriça

Artículo 60. Âmbito de la vigilancia transfronteriza

1. Os agentes de um dos Estados que, no âmbito de uma investigação criminal relativa a uma infração penal passível de extradição, mantenham sob vigilância no seu país uma pessoa por se suspeitar do seu envolvimento numa infração penal passível de extradição ou, como elemento indispensável numa investigação criminal, por haver fortes razões para se presumir que ela pode levar à identificação ou localização de uma outra pessoa suspeita de envolvimento numa

infração penal, passível de extradição, são autorizados a prosseguir essa vigilância no território de outro Estado, quando este tenha autorizado a vigilância transfronteiriça com base num pedido prévio devidamente fundamentado de facto. Esta autorização pode ser sujeita a condições.

Mediante pedido, a vigilância será confiada aos agentes da parte contratante no território da qual esta é efetuada.

O pedido mencionado deve ser dirigido à autoridade designada por cada um dos Estados, competente para conceder ou transmitir a autorização solicitada.

2. Quando, por razões especialmente urgentes, a autorização prévia das autoridades do Estado onde decorrerá a vigilância não puder ser solicitada, os agentes de vigilância serão autorizados a prosseguir para além da fronteira a vigilância de uma pessoa, nas seguintes condições:

a) A passagem da fronteira será imediatamente comunicada durante a vigilância à autoridade do Estado em cujo território a vigilância prossegue.

b) Será imediatamente transmitido um pedido de autorização, expondo os motivos que justificam a passagem da fronteira sem autorização prévia.

Será posto fim à vigilância a partir do momento em que o Estado, em cujo território se realiza, o solicitar, na sequência da comunicação referida na alínea a) ou do pedido referido na alínea b) ou, caso a autorização não seja obtida, cinco horas após a passagem da fronteira.

3. A vigilância a que se referem os n.ºs 1 e 2 só pode ser efetuada nas seguintes condições:

a) Os agentes de vigilância devem cumprir as disposições do presente artigo e o direito do Estado em cujo território atuam; devem obedecer às ordens das autoridades localmente competentes.

b) Ressalvadas as situações previstas no n.º 2, os agentes devem ser portadores, durante a vigilância, de um documento que certifique que a autorização foi concedida.

c) Os agentes de vigilância devem poder justificar a qualquer momento o carácter oficial da sua missão.

d) Os agentes de vigilância podem estar munidos da sua arma de serviço durante a vigilância, salvo decisão expressa em contrário da parte requerida; é proibida a sua utilização salvo em caso de legítima defesa.

- e) É proibida a entrada nos domicílios e nos locais não acessíveis ao público.
- f) Os agentes de vigilância não podem interpelar, nem prender a pessoa vigiada.
- g) Qualquer operação será objeto de relatório às autoridades do Estado em cujo território se realizou; pode ser exigida a comparência pessoal dos agentes de vigilância.
- h) As autoridades do Estado de que os agentes de vigilância são originários colaborarão a pedido das autoridades do Estado em cujo território se realizou a vigilância, no inquérito consecutivo à operação em que participaram, inclusivamente em processos judiciais.

Artículo 61. Cooperação simplificada

Sem prejuízo das regras gerais aplicáveis em matéria de vigilância transfronteiriça as autoridades competentes poderão estabelecer contactos diretos informais com vista a informar da possível necessidade de realizar vigilância transfronteiriça, a comunicar as situações a que se refere o nº2, a obter a correspondente autorização e obter informação sobre os resultados da vigilância.